

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA representado legalmente por la señora DORANY MARULANDA CASTAÑEDA.
DEMANDADO	COLPENSIONES
PROCEDENCIA	JUZGADO ONCE LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-011-2019-00604-01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN y CONSULTA
TEMAS Y SUBTEMAS	- Pensión de sobrevivientes – Inclusión de tiempo del Servicio Militar Obligatorio - Intereses Moratorios
DECISIÓN	MODIFICA y REVOCA PARCIALMENTE

SENTENCIA No. 094

Medellín, veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL, según consta en Acta N°013 de 2023, se procede a dictar SENTENCIA en orden a resolver el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la apoderada judicial del DEMANDANTE, así como el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA en favor de COLPENSIONES, respecto de la Sentencia No. 095 del 22 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

Se reconoce personería a la abogada TATIANA ÁLVAREZ LÓPEZ, identificada con T.P. No. 322.146 del C.S. de la J. para que actúe como apoderada sustituta de COLPENSIONES., en los términos y para los efectos del poder conferido, visible a folio 3 Archivo 04 ED Tribunal.

ANTECEDENTES

La señora DORANY MARULANDA CASTAÑEDA, actuando en representación de su hijo menor MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA, presentó demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES con el fin de que: 1) Se declare que su hijo tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su padre, ÓSCAR HUMBERTO OQUENDO TORRES, a partir del 20 de septiembre de 2012. 2) De igual forma, reclamó el pago de los intereses moratorios reglados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o la indexación de las sumas resultantes.

Fundamentó las pretensiones en que, de su relación con el señor ÓSCAR HUMBERTO OQUENDO TORRES procrearon al menor MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA, nacido el 3 de noviembre de 2007.

No obstante, expuso que el padre de su hijo falleció el 20 de septiembre de 2012, momento para el cual acreditaba 25,86 semanas de cotización de las cuales 25,72 semanas fueron cotizadas durante el último año de servicios. Que, en virtud de lo anterior, el 13 de enero de 2015 solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de su hijo, petición negada en Resolución GNR 129846 del 5 de mayo de 2015 por no contar el causante con las 50 semanas requeridas durante los últimos 3 años anteriores a la muerte.

Sin embargo, anotó que, como lo muestra el Certificado de Información Laboral expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, el afiliado fallecido también prestó sus servicios como soldado bachiller en el Ejército Nacional, entre el 17 de febrero de 2010 y el 4 de abril de 2011, equivalente a 50,28 semanas que, sumadas a las anteriores, arrojan un total de 76,14 semanas, suficientes para dejar causado el derecho pensional ahora reclamado (f. 1 a 7 Archivo 01 Expediente Escaneado)

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La demandada COLPENSIONES dio contestación al gestor oponiéndose a las pretensiones de la demanda, manifestando, en síntesis, que el causante NO cotizó las 50 semanas establecidas en la legislación aplicable para dejar consolidado el derecho en favor de sus beneficiarios. En consecuencia, formuló las excepciones de “(...) INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES DE MORA DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993; INEXISTENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LA CONDENA; PRESCRIPCIÓN; BUENA FE DE COLPENSIONES e IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS (...)” (f. 40 a 53 Archivo 01 Expediente Escaneado).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, mediante Sentencia No. 095 del 22 de noviembre de 2021, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín decidió:

“(...) PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE a reconocer y pagar al menor MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA representado legalmente por su madre señora DORANY MARULANDA CASTAÑEDA identificada con c.c. n. o 1.151.448.357, la pensión de sobrevivientes en los términos de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 en la cual se deberá calcular la mesada pensional de conformidad con el artículo 48 de la Ley de 1993, mesada pensional que podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente y sobre 13 mesadas anuales a partir del 20 de septiembre de 2012 y hasta el cumplimiento de su mayoría de edad, desde los 18 años deberá allegar ante la AFP el certificado de estudios, documento idóneo para acreditar la condición de estudiante y hasta los 25 años de edad. Esto de conformidad con el artículo 2 de la 1574 de 2012.

De lo liquidado por retroactivo, se autoriza a COLPENSIONES EICE. para descontar del mismo, el valor de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud en un 12 %.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE, a realizar el trámite de la reclamación del bono pensional por el periodo comprendido entre el 17 de 2010 al 14 de febrero de 2011 y a comunicar, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, esta decisión a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES, para los efectos legales correspondientes, al traslado del bono pensional por parte del Ministerio de Defensa Nacional a la AFP COLPENSIONES EICE.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE, a pagar el valor de la indexación de la condena desde octubre del año 2012 y hasta que se realice el pago efectivo, aplicando la fórmula establecida y de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: Las COSTAS estarán a cargo de COLPENSIONES EICE en el valor equivalente a 3 SMLMV, es decir, la suma de \$2.725.578,00 y a favor de la parte demandante. (...)

Como argumentos de su decisión expuso el *A quo* que, al tenor de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, el afiliado que fallezca puede dejar derecho a la pensión de sobrevivientes en favor de sus causahabientes, siempre que aquel hubiere cotizado por lo menos 50 semanas durante los últimos tres (3) años anteriores a la muerte.

Frente a este requisito expuso que, a la luz de lo señalado en la Ley 1861 de 2017 que derogó el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, en concordancia con lo dicho en Sentencia Rad. 47354 de 2016, así como la T-063 de 2013, hay lugar a contabilizar junto a las semanas aportadas al sistema de pensiones, el tiempo prestado al *servicio militar obligatorio*, que en el *sub-exámine* lo fue entre 2010 y 2011, el cual deberá gestionarse por la administradora de pensiones ante el Ministerio de Defensa Nacional, para el respectivo reconocimiento del pago del bono pensional correspondiente.

En ese sentido, y luego de recordar cual es el propósito de la pensión de sobrevivientes anotó que, no habiendo discusión sobre el parentesco entre el fallecido y el demandante, en torno a las semanas de cotización exigidas, precisó que al computar las semanas aportadas a **COLPENSIONES** junto con el periodo servido al Ejército Nacional, arroja que entre el 20 de septiembre de 2009 y el 20 de septiembre de 2012, el fallecido registra más de 75 semanas de cotización, lo que da lugar a reconocer la pensión en favor del menor **MIGUEL ÁNGEL OQUENDO**, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad, y partir de allí podrá continuar percibiéndola, siempre que acredite estudios en los términos de la ley 1574 de 2012.

Frente a la cuantía de la prestación, indicó que, como para la liquidación deben tenerse en cuenta todos los periodos laborados, incluido el servido al Ejército Nacional, por el cual el Ministerio de Defensa deberá remitir el bono pensional a **COLPENSIONES**, esta circunstancia impedía calcularla, considerando que, en todo caso, la entidad no podía pagar la pensión por debajo del salario mínimo, autorizando a la entidad para que descuenta del retroactivo a pagar en favor de aquel, lo correspondiente por aportes a salud.

Así mismo expresó que, la pensión debe pagarse desde el 20 de septiembre de 2012, en tanto ninguna mesada está afectada por prescripción, por tratarse de un menor de edad. Sin embargo, expuso que no había lugar al reconocimiento de intereses moratorios, toda vez que la prestación finalmente es reconocida a partir de una interpretación jurisprudencial.

Acto seguido explicó que, no le asistía razón a la entidad al mencionar que no procedía la acumulación de tiempos públicos y privados, conforme lo reglado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, postura avalada incluso por la Jurisprudencia.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la parte **DEMANDANTE** apeló la decisión en lo concerniente a la negativa de los intereses moratorios argumentando que, desde el año 2015 la parte hizo la reclamación pensional correspondiente, que fuere negada por la entidad en la misma anualidad, escenario en el que se le puso de presente a **COLPENSIONES** que debía tener en cuenta el tiempo de servicio del causante con el Ejército Nacional.

Continúa reseñando que, si bien ha sido a nivel jurisprudencial que se ha avalado la inclusión de tal periodo para efectos pensionales, las decisiones mencionadas por el Juzgado en su sentencia datan de 2013 y 2016, es decir, anteriores incluso a una nueva reclamación impetrada en el año 2019, y que, siendo conocidas por la demandada, daban lugar a concluir que la negativa no estuvo sustentada en razón valedera alguna.

Así mismo expresó que, incluso al acudir a la Ley 100 de 1993 en esta normativa se establece que el tiempo público debe ser tenido en cuenta para el reconocimiento pensional, aspectos que dan lugar a acceder a los intereses reclamados.

ALEGATOS DE CONCLUSION

Dentro del término otorgado, la apoderada judicial de **COLPENSIONES** reiteró la postura sostenida desde la contestación a la demanda, esta es, que, el causante, señor **ÓSCAR HUMBERTO OQUENDO TORRES**, no cotizó las 50 semanas exigidas durante los 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento, según lo establecido en la Ley 797 de 2003, sin que pueda acumularse a las semanas aportadas, el tiempo de servicio público del causante, como quiera que la Sentencia SU-769 de 2014 solo autorizó esta posibilidad a partir de 2014 (Archivo 04 ED Tribunal).

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en el presente asunto se circunscribe a establecer, en primera medida, si el señor **ÓSCAR HUMBERTO OQUENDO TORRES** dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes conforme lo establecido en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003.

De ser así, la Sala estudiará si el menor **MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA**, en su condición de hijo del causante, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a partir del 20 de septiembre de 2012.

Dilucidado lo anterior, se estudiará la efectividad de la prestación, previo estudio de la excepción de prescripción propuesta por la pasiva, y la procedencia de los intereses moratorios reclamados.

Se dispone entonces la Sala a resolver los planteamientos, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para comenzar, se precisa que no son objeto de debate los siguientes supuestos fácticos:

- (i) Que el señor **ÓSCAR HUMBERTO OQUENDO TORRES** afiliado a COLPENSIONES, falleció el **20 de septiembre de 2012**, tal como se desprende del Registro Civil de Defunción visible a folio 10 Archivo Expediente Escaneado.
- (ii) Que el menor **MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA**, nacido el **3 de noviembre de 2007**, era hijo del afiliado fallecido, señor **ÓSCAR HUMBERTO OQUENDO TORRES**, según muestra el Registro Civil de Nacimiento militante a folio 11 Archivo Expediente Escaneado.
- (iii) Que el señor **OQUENDO TORRES** prestó servicios en el Ejército Nacional - Ministerio de Defensa Nacional en condición de soldado bachiller desde el 17 de febrero de 2010 hasta el 4 de febrero de 2011 (f. 20 a 22 Archivo Expediente Escaneado), equivalente a **54 semanas**.

- (iv) De igual forma, el citado desplegó posteriormente actividad laboral y se encontraba afiliado en pensiones a **COLPENSIONES** (f. 23 a 24 Archivo Expediente Escaneado), acreditando cotizaciones a esta entidad por un total de **25,86 semanas** entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de agosto de 2012 (f. 23 a 24 Archivo Expediente Escaneado).
- (v) Que el **13 de enero de 2015**, el menor **MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA**, representando por su señora madre, solicitó a **COLPENSIONES** el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en condición hijo del fallecido, petición negada por esta entidad en ***Resolución GNR 129846 del 5 de mayo de 2015*** (f. 25 a 31 Archivo Expediente Escaneado).

DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

Ha sido criterio reiterado de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral que, la norma que rige la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del deceso del causante afiliado o pensionado (sentencia SL4851-2019, SL4690-2019 y SL4244-2019 entre otras), suceso que en el asunto de marras acaeció el **20 de septiembre 2012** (f. 10 Archivo Expediente Escaneado), calenda para la cual estaba vigente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, el afiliado ha debido cotizar **por lo menos 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores al fallecimiento.**

Por su parte el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el Art 13 de la Ley 797 de 2003, con relación a los beneficiarios indica que, lo serán **los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte.**

En ese sentido valga anotar que, respecto del vínculo de consanguinidad entre el menor **MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA** y el fallecido **ÓSCAR HUMBERTO OQUENDO TORRES** no hay mayor discusión, toda vez que la condición de hijo aparece acreditada con el Registro Civil de Nacimiento de folio 11 Archivo Expediente Escaneado.

Ahora, el centro de la controversia gira en torno al requisito de semanas evocado, pues tanto en sede administrativa, como judicial, y así también en la alzada que ocupa la atención de la Sala, fue postura férrea de la demandada, argumentar que el causante no cumplió el número de semanas requerido para dejar causado el derecho por sobrevivencia en favor de sus beneficiarios.

Así entonces, para desatar la disyuntiva, huelga acudir al cúmulo probatorio arrojado al expediente, del que se extrae que, en efecto, lo primero que se muestra es que el señor **OQUENDO TORRES** solo cotizó **25,86 semanas** entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de agosto de 2012 (f. 23 a 24 Archivo Expediente Escaneado), las cuales, serían en principio insuficientes de cara al número exigido para causar el derecho de sobrevivientes (50 semanas).

No obstante, desde la demanda se invoca que el *de cujus* también acredita haber prestado el servicio militar obligatorio entre el **17 de enero de 2010 y el 4 de febrero de 2011**, equivalente a **54 semanas** (f. 20 a 22 Archivo Expediente Escaneado), periodo frente al cual sostuvo la entidad, no resulta procedente adosarlo a las semanas efectivamente cotizadas por el afiliado.

Empero, más allá de lo anotado por la accionada, en relación con la inclusión de tales periodos en el cómputo final de semanas, es menester indicar que, como bien lo anotó el Juzgador de primer grado, la Jurisprudencia Especializada Laboral ha interpretado el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, que autorizaba la inclusión del tiempo de prestación del servicio militar para el estudio de la pensión de vejez, haciéndolo extensivo a las demás prestaciones por **invalidéz** y **sobrevivencia**, bajo la premisa de que estas también hacen parte del sistema de seguridad social integral, posibilitando, entonces “(...) «que ese tiempo sea computado en cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100, siendo de cargo de la entidad pública respectiva o de la Nación según el caso (...)” (SL11188-2016).

De esa manera quedó reiterado, por ejemplo, en Sentencia SL3059-2021 en la cual se memoró lo dicho en Sentencias SL11188-2016, SL Rad. 41672 del 19 de octubre de 2011 y SL Rad. 42849 del 21 de marzo de 2012, resaltándose lo dicho en la primera de las citadas:

“(...) En aras de dilucidar este problema, es oportuno recordar, en primer lugar, que la L. 48/1993 fue concebida con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema integral de seguridad social. Por esta razón, su análisis interpretativo debe realizarse con sujeción a los objetivos, principios y contenidos de la L. 100/1993, en la cual se inserta y articula, para ser parte de un conjunto normativo de protección social, basado en unos principios de relevancia especial.

Particularmente, son dos principios los que entran en juego al momento del análisis del art. 40 de la L. 48/1993, a saber: el principio de universalidad y el de integralidad; el primero de orden constitucional y legal, y el segundo de desarrollo legal. Así, de acuerdo con el art. 2º de la L. 100/1993, el sistema de seguridad social es universal en la medida que dispensa una protección, por igual, a todas las personas, y es integral, en tanto cubre todas las contingencias que afectan la salud, condiciones de vida y capacidad económica de los habitantes.

En concreción del principio de universalidad del sistema general de pensiones, el literal f) del art. 13 de la L. 100/1993 consagró la posibilidad de sumar y darle valor a todas «las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio». Conforme a esto, las fronteras impuestas por los anteriores regímenes pensionales, que coexistían dispersamente y condicionaban la validez de los tiempos laborados a situaciones tales como que hubieran sido objeto de aportes, laborados en determinados sectores o entidades, cotizados a específicos entes previsionales, entre otros, son eliminadas, para, en su lugar, tomar como referente de construcción de la pensión la prestación del servicio en cuanto tal.

(...)

Por consiguiente, frente a esta clara pretensión de universalidad, integración e inclusión, donde todos los tiempos de servicio suman para «el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes» (art. 13 L. 100/1993), en la actualidad la limitación impuesta en el art. 40 de la L. 40/1993, carece de una justificación objetiva y valorativa que la respalde.

(...)

Desde este punto de vista, a juicio de la Sala, la mejor solución interpretativa es aquella según la cual el art. 40 de la L. 48/1993, no solo cubre las pensiones de jubilación o vejez, sino también las de sobrevivencia e invalidéz, en el entendido que la protección en pensiones que ofrece la L. 100/1993 abarca tres ámbitos: vejez, invalidéz y muerte; de manera que, no es apropiado limitar la norma a solo uno, como si el ser humano pudiera fraccionarse en su integridad. (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala).

De ahí que ningún reparo tiene la decisión asumida en primera instancia en relación con este tópico, pues además de lo establecido en el precedente en cita, que no restringe la inclusión del periodo del servicio militar obligatorio solo para las pensiones de vejez, recuérdese que, por disposición del artículo 33, Literal B, parágrafo 1º, es totalmente viable

sumar tiempos de servicios públicos a los aportes efectuados al sistema de pensiones como tal (SL3062-2021).

Así pues, las circunstancias de orden legal y jurisprudencial descritas refuerzan la conclusión relativa a la procedencia de contabilizar con fines pensionales el tiempo acreditado por el causante al servicio del Ejército Nacional entre 2010 y 2011 (f. 20 a 22 Archivo Expediente Escaneado) a efectos de estudiar la procedencia de la pensión reivindicada en este asunto.

Por consiguiente, al tomar las 25,86 semanas reportadas en la historia laboral de **COLPENSIONES**, junto con el citado periodo del servicio militar obligatorio, que tal como se dejó expuesto asciende a 54 semanas, se advierte sin mayor dificultad que, dentro de los tres (3) años anteriores a su deceso, esto es, entre el 20 de septiembre de 2009 y el 20 de septiembre de 2012, el causante acumuló un total de **76,86 semanas**, suficientes para dejar causado el derecho pensional en favor del demandante, como bien lo determinó el *A quo*.

La prestación es efectiva desde el **20 de septiembre de 2012**, fecha del deceso del afiliado, con derecho a 13 mesadas anuales, por haberse causado la prestación con posterioridad al 31 de julio de 2011, al tenor de lo establecido en el AL 01 de 2005. Tal derecho se extiende hasta alcanzar la edad de 18 años, o hasta los 25 años en el evento que acredite estar adelantando estudios, como acertadamente lo precisó el *A quo*.

Ahora, en lo concerniente a la cuantía de la prestación, es claro para la Sala que la misma es equivalente a UN (1) SMLMV, esto conforme al número mínimo de semanas cotizadas (76,86), y a que la base salarial en cada una de estas, por ejemplo, en las registradas en la historia laboral de **COLPENSIONES** (f. 23 a 24 Archivo Expediente Escaneado), apenas superaba el salario mínimo legal de la época, mientras que en lo referente al tiempo del servicio militar (f. 20 a 22 Archivo Expediente Escaneado), las sumas reconocidas como asignación mensual, ni siquiera alcanzan el estipendio mínimo de la época.

En igual sentido extraña a la Sala que, por encima de lo expuesto, y a que en parte alguna el pago de la prestación se halla supeditado a los trámites interadministrativos atinentes al pago del bono pensional derivado del tiempo cumplido al servicio militar obligatorio, el Juez de primer grado omitió liquidar el retroactivo adeudado al demandante, función que, por virtud del artículo 283 CGP, a efectos de concretar la condena por este concepto, le imponía efectuar los cálculos respectivos, por lo que se procederá por la Corporación a realizarla, todo en orden a proveer un correcto servicio de administrar justicia.

Definido lo anterior, se tiene que el retroactivo generado desde el 20 de septiembre de 2012, debidamente actualizado al 31 de marzo de 2023, asciende a la suma de **\$105.699.807**, a cuyo valor se condenará a la demandada, debiendo modificarse la sentencia de primer grado en el sentido de precisar dicho valor, autorizándose igualmente a la entidad para descontar lo pertinente por aportes con destino al SGSSS.

DESDE	HASTA	#MES	MESADA	RETROACTIVO
20/09/2012	31/12/2012	4,37	\$ 566.700,00	\$ 2.474.590,00
1/01/2013	31/12/2013	13	\$ 589.500,00	\$ 7.663.500,00
1/01/2014	31/12/2014	13	\$ 616.000,00	\$ 8.008.000,00
1/01/2015	31/12/2015	13	\$ 644.350,00	\$ 8.376.550,00
1/01/2016	31/12/2016	13	\$ 689.455,00	\$ 8.962.915,00
1/01/2017	31/12/2017	13	\$ 737.717,00	\$ 9.590.321,00
1/01/2018	31/12/2018	13	\$ 781.242,00	\$ 10.156.146,00
1/01/2019	31/12/2019	13	\$ 828.116,00	\$ 10.765.508,00

1/01/2020	31/12/2020	13	\$ 877.803,00	\$ 11.411.439,00
1/01/2021	31/12/2021	13	\$ 908.526,00	\$ 11.810.838,00
1/01/2022	31/12/2022	13	\$ 1.000.000,00	\$ 13.000.000,00
1/01/2023	31/03/2023	3	\$ 1.160.000,00	\$ 3.480.000,00
TOTAL RETROACTIVO				\$ 105.699.807,00

INTERESES MORATORIOS

Para resolver el problema jurídico planteado, es menester indicar que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dispone que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, el fondo de pensiones estará en la obligación de reconocer al pensionado, además de la obligación a su cargo, los intereses moratorios vigentes a la fecha en que se efectúe el pago.

Con relación a la fecha a partir de la cual deben concederse tales intereses, por vía Jurisprudencial se tiene establecido que éstos se causan una vez vence el plazo que por ley tiene la entidad de seguridad social para resolver la solicitud del derecho. Así lo señaló la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias SL11750 de 2014, SL13670 de 2016 y SL4985 de 2017.

En el presente asunto, se trata de una pensión de sobreviviente, por lo que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, **los fondos administradores de pensiones cuentan con un término máximo de dos (2) meses para resolver las solicitudes atinentes a este derecho.**

Ahora bien, es importante anotar que la Jurisprudencia Especializada Laboral ha definido una serie de situaciones excepcionales consideradas como justificantes para exonerar del pago de estos réditos, citándose a manera de ejemplo lo dicho en la Sentencia SL309-2022, a saber:

“(…) 1. La negativa de las entidades para reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013); 2. Se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL 787-2013, rad.43602, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016); 3. Se inaplica el requisito de fidelidad al sistema. Así se expuso en la sentencia CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018 y CSJ SL4129-2018; 4. La controversia se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016) y 5. Existe controversia entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, tal como se precisó en sentencias CSJ SL 21 sep. 2010, rad. 33399 y CSJ SL 14528-2014. (…)”.

En el particular, el Juez de primer grado consideró que no había lugar a los intereses peticionados, afirmando que la inclusión del tiempo de servicio en las fuerzas militares era computable para pensión por desarrollo jurisprudencial. Sin embargo, es menester señalar que, en casos similares al ahora analizado, la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha precisado que la contabilización del periodo en el servicio militar con fines pensionales opera por ministerio de la ley, dando viabilidad a imponer el reconocimiento de los intereses moratorios peticionados en cabeza de COLPENSIONES.

Justo en esos términos fue precisado en Sentencias SL3059-2021, SL3062-2021 y SL1067-2021, en la cual se anotó:

“(…) En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 solicitados entre las pretensiones principales, esta Corporación ha sostenido que los mismos, proceden sin que tenga relevancia alguna establecer juicios de valor referente a la existencia de la «buena fe» por parte del obligado, es decir, procede aun cuando la entidad hubiera tenido el convencimiento que no era dable el reconocimiento de la prestación deprecada, toda vez que su naturaleza es «resarcitoria» y no «sancionatoria», así se encuentra adoctrinado por la Sala,

refiriéndose a la naturaleza de los intereses de mora, entre otras, en la sentencia CSJ SL8949-2017.

Advertido lo anterior, conforme a lo adocinado por la Sala en sentencias CSJ SL11188-2016 y SL3110-2020, el cómputo del servicio militar para el reconocimiento de la pensión, bajo cualquier régimen, opera por ministerio de ley, por tal razón procede la condena moratoria, contemplada en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 (...)". (Subraya y Negrilla de la Sala).

Así entonces, teniendo que el demandante elevó la reclamación pensional el 13 de enero de 2015 (f. 367 Archivo 02 ED), los intereses en comento se generan a partir del **14 de marzo de 2015**, día siguiente al vencimiento de los dos (2) meses con que contaba la demandada para reconocer el derecho por sobrevivencia, liquidados hasta el momento en que esta concurra al pago de las mesadas adeudadas.

Por consiguiente, habrá de revocarse parcialmente la sentencia por este aspecto, relvándose a la accionada de cancelar la indexación reconocida, para condenarla en su lugar, al pago de los réditos por mora en las condiciones anotadas.

Es válido indicar que, en relación con la excepción de prescripción (Art. 151 CPLSS), tanto las mesadas como los intereses moratorios a los que tiene derecho el actor, no están afectados por dicha figura, ya que al tenor de lo preceptuado en el artículo 2530 del Código Civil, la prescripción se suspende en favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría, entendiéndose que frente a los menores de edad, no corre el término de prescripción señalado en la ley porque se encuentra suspendido, y sólo empieza a correr cuando alcanzan la mayoría de edad.

Consecuencia de lo hasta aquí expuesto, se modificará la sentencia en lo relacionado con la concreción del monto de la mesada pensional del demandante y el retroactivo adeudado en favor de aquel. Se revocará la negativa de los intereses moratorios reclamados, para acceder a estos en los términos anotados atrás. Las costas en esta instancia a cargo de **COLPENSIONES**, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a UN (1) SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia resuelve en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el numeral **PRIMERO** de la Sentencia No. 095 del 22 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de:

- **PRECISAR** que la mesada pensional a la que tiene derecho el menor **MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA** a partir del 20 de septiembre de 2012, es equivalente a UN (1) SMLMV.
- **CONDENAR** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar en favor del menor **MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA** la suma de **\$105.699.807**, como retroactivo causado desde el 20 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 2023.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral **TERCERO** de la sentencia estudiada en cuanto al reconocimiento de la indexación de las mesadas pensionales adeudadas en favor del demandante, para en su lugar, **CONDENAR** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar al menor **MIGUEL ÁNGEL OQUENDO MARULANDA** los intereses de mora reglados en el artículo


141 de la Ley 100 de 1993 generados sobre las mesadas adeudadas, liquidados desde el 14 de marzo de 2015 y hasta cuando se efectúe el pago de lo adeudado.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la Sentencia apelada y consultada.

CUARTO: Las **COSTAS** de segunda instancia están a cargo de la demandada, incluyendo como agencias en derecho de esta sede la suma equivalente a UN (1) SMLMV.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA